

SEGURIDAD HUMANA Y PAZ TOTAL

ANÁLISIS Y PROSPECTIVAS

Grupo de investigación Conflictos,
Violencias y Seguridad
Humana de la Universidad de Antioquia

**Julián Andrés Muñoz Tejada
Juan Pablo Acosta Navas**

(Editores)



Bogotá, 2025



Copyright ® 2025

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Seguridad humana y paz total. Análisis y prospectivas / editores académicos: Julián Andrés Muñoz Tejada y Juan Pablo Acosta Navas ; autores: Alexandra Fernández Rojas [y 14 más]. -- Primera edición. -- Medellín: Tirant lo Blanch; Grupo de investigación, Conflictos, violencias y seguridad humana de la Universidad de Antioquia, 2025.

237 páginas.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-84-1095-494-6

1. Seguridad Humana -- Colombia. 2. Mantenimiento de la paz -- Colombia. 3. Seguridad ciudadana -- Colombia. 4. Crimen organizado -- Colombia. I. Muñoz Tejada, Julián Andrés, editor, autor. II. Acosta Navas, Juan Pablo, editor, autor. III. Fernández Rojas, Alexandra, autora. IV. Cadavid Echeverri, Claudia, autora. V. Ibargüen Palomeque, Demetria, autora. VI. Rojas Usma, Didiher Mauricio, autor. VII. Bedoya, Jairo, autor. VIII. León León, Luis Emilio, autor. IX. Quintero Valencia, María Isela, autora. X. Maya Llano, Natalia, autora. XI. Pérez Puerta, Natalia, autora. XII. Angarita Cañas, Pablo Emilio, autor. XIII. Valencia Cárdenas, Susana, autora. XIV: Osorio Valencia, Yhony Alexander, autor. XV. Benjumea Ocampo, Yorlady, autora. XVI. Abello Colak, Alexandra, escritora de prólogo, XVII. Pearce, Jenny, escritora de prólogo.

LC: JZ5538

CDD: 303.66 ed. 23

Catalogación en publicación de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

© Julián Andrés Muñoz Tejada
Juan Pablo Acosta Navas
(Editores)

© Tatiana Dangond Aguancha
Directora de la colección

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
Calle 11 # 2-16 (Bogotá D.C.)
Teléf.: 4660171
Email: tlb@tirant.com
Librería virtual: www.tirant.com/co/
ISBN: 978-84-1095-494-6

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

Índice

PRÓLOGO

LA CO-CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y SEGURIDAD EN COLOMBIA:
PROCESOS DE HUMANIZACIÓN “DESDE ARRIBA” Y “DESDE ABAJO”. 9

Alexandra Abello Colak

Jenny Pearce

PRESENTACIÓN 25

Julián Andrés Muñoz Tejada

Juan Pablo Acosta Navas

INTRODUCCIÓN

SEGURIDAD HUMANA Y SUS USOS 31

Julián Andrés Muñoz Tejada

CAPÍTULO 1

DE LO TOTAL Y LO HUMANO: A PROPÓSITO DE PAZ TOTAL Y SEGURIDAD
HUMANA EN EL GOBIERNO PETRO 41

Julián Andrés Muñoz Tejada

CAPÍTULO 2

LA PAZ TOTAL AL TABLERO: PERSPECTIVAS DESDE EL DERECHO
INTERNACIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PAZ DEL GOBIERNO PETRO,
2022-2026 59

Juan Pablo Acosta Navas

CAPÍTULO 3

POLICÍA, VIOLENCIA, PROTESTA SOCIAL Y SEGURIDAD HUMANA..... 81

Pablo Emilio Angarita Cañas

Natalia Pérez Puerta

Yhony Alexander Osorio Valencia

CAPÍTULO 4

ESTABILIZACIÓN POSCONFLICTIVA Y PAZ TOTAL: DE LA MILITARIZACIÓN
DE LA SEGURIDAD AL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD HUMANA
EN COLOMBIA 107

Didiher Mauricio Rojas Usma

CAPÍTULO 5

DESAFÍOS DE LA PAZ URBANA EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ	131
---	-----

Pablo Emilio Angarita Cañas

Natalia Maya Llano

CAPÍTULO 6

OTRA NEGOCIACIÓN CON LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE MEDELLÍN, ¿SOBRE QUÉ?	155
---	-----

Jairo Bedoya

CAPÍTULO 7

CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS DE SEGURIDAD HUMANA Y SU APORTE A LA PAZ TOTAL. CASO VEREDA GRANIZAL–MUNICIPIO DE BELLO	181
---	-----

Alexandra Fernández Rojas

Claudia Cadavid-Echeverri

Luis Emilio León León

CAPÍTULO 8

SEGURIDAD HUMANA Y PAZ TOTAL EN LAS VOCES DE TRES LIDERESAS SOCIALES DE MEDELLÍN	211
---	-----

Demetria Ibargüen Palomeque

María Isela Quintero Valencia

Yorlady Benjumea Ocampo

Susana Valencia Cárdenas

AUTORAS Y AUTORES	235
-------------------------	-----



Prólogo

LA CO-CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y SEGURIDAD EN COLOMBIA: PROCESOS DE HUMANIZACIÓN “DESDE ARRIBA” Y “DESDE ABAJO”

Alexandra Abello Colak*

Jenny Pearce**

Introducción

Este libro nos ofrece una mirada, tanto académica como desde las realidades vividas por ciudadanas y ciudadanos de comunidades vulnerables de Medellín, a los procesos de construcción de paz y seguridad en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro. Este intercambio de conocimientos es para nosotras un paso importantísimo hacia la reducción de múltiples violencias, la profundización de la democracia y la garantía de la seguridad en todos los ámbitos de la vida. La co-construcción de una nación incluyente y justa, y de un Estado capaz de reducir las violencias, requiere la apertura de espacios para la participación plena de la ciudadanía, en su totalidad y con todas sus diferencias, y de aportes como los que hace este libro a partir de análisis críticos y propositivos.

Reconocemos, como lo expone claramente este libro, los grandes desafíos de alinear los esfuerzos por alcanzar la paz con los orientados a mejorar la seguridad en un país como Colombia, donde las violencias asociadas al conflicto armado y a la competencia por economías ilegales se entremezclan y refuerzan continuamente con otras violencias de índole social, institucional y cultural. Al poner el foco

* Visiting Fellow, Department of Geography & Environment, London School of Economics and Political Science.

** Visiting Professor, International Inequalities Institute, London School of Economics and Political Science.

en la decisión histórica del gobierno de Gustavo Petro de alejarse de los enfoques de seguridad dominantes y de buscar la desmovilización y el sometimiento de todos los grupos que ejercen violencia armada en la Colombia rural y urbana, este libro profundiza nuestra comprensión de lo que significan la Paz Total propuesta por el gobierno y la noción de seguridad humana, popularizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace tres décadas y adoptada por el presidente como parte de su visión de paz total. El libro nos ofrece también un riguroso análisis crítico de las dificultades conceptuales de estos enfoques y los retos para su implementación.

En un momento en que aumenta la violencia en varias regiones del país, producto del perpetuo reciclaje de violencias y la constante mutación de actores armados, y en el que los discursos y las prácticas de seguridad represivas y militarizadas ganan fuerza en América Latina, este libro ofrece múltiples luces. Nos invita a pensar, por ejemplo, en cómo se puede fortalecer la búsqueda de soluciones sostenibles que protejan los derechos de las personas y reduzcan múltiples formas de violencia y crimen, generando así un debate con implicaciones más allá de Colombia. La paz total y la seguridad humana, como lo mencionaremos más adelante, son temas de importancia global que exigen análisis serios, como los que ofrece este libro, y un debate que reconozca que la co-construcción de paz es un proceso complejo que implica diálogos entre muchos tipos de conocimiento y experiencias diferenciadas de la realidad. Asimismo, es necesario un consenso mínimo sobre cómo el Estado y la sociedad deben responder a violencias y criminalidad —incluida la corrupción de los poderosos— con políticas públicas que reduzcan y no reproduzcan estos problemas.

La contribución que hace este libro al debate es particularmente relevante porque proviene de un grupo diverso de académicas y académicos, así como de líderes comunitarias quienes, en su rol de investigadoras comunitarias, llevan más de una década co-construyendo conocimiento sobre lo que significa la seguridad para las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas, personas que han sido víctimas de desplazamiento, la comunidad LGBTIQ+ y las comunidades afrodescendientes que habitan en Medellín¹. Desde el Observatorio de Seguridad Humana de la

1 Usando metodologías participativas con estos grupos poblacionales, este grupo ha producido trabajos como: “Nuestras Voces sobre Seguridad Humana en Medellín: Diálogos sobre seguridad” (OSHM, 2014), “Hacia una Agenda de Seguridad desde la Perspectiva de las Comunidades” (Gómez *et al.*, 2014), “Pandemia y Seguridad Humana: Impactos del COVID-19 en las comunidades de Medellín y propuestas para afrontarlos” (OSHM, 2021). Para ampliar la información sobre este tipo de trabajos visitar la página del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín

Universidad de Antioquia (OSHM), este grupo, en alianza con diversas organizaciones civiles y académicas, ha hecho aportes significativos a la ampliación del debate sobre seguridad en América Latina. Además, ha desarrollado metodologías que permiten comprender mejor qué es la seguridad y cómo transformarla en un bien público al que todas las personas puedan acceder, lo cual es imprescindible para alcanzar la paz.

La aplicación de metodologías de investigación y acción que posibilitan un diálogo constructivo con comunidades y organizaciones sociales de base en zonas afectadas por múltiples formas de violencia e inseguridad puede generar evidencia empírica y conocimiento valioso. Este enfoque no solo contribuye a avanzar hacia una crítica que deconstruye, sino que es propositivo y contribuye a la concepción y al diseño de alternativas de acción viables y relevantes a las necesidades y anhelos de la población. Un ejemplo de ello es la metodología para la co-construcción de agendas de seguridad humana “desde abajo”, ilustrada en uno de los capítulos de este libro. Co-construida por el Observatorio en Medellín en 2013, a partir del trabajo con comunidades de varias comunas², esta metodología ha sido utilizada en otros países para articular respuestas de seguridad que buscan reducir violencias y atender necesidades de comunidades y grupos vulnerables. En Honduras y México, por ejemplo, suscitó procesos de participación comunitaria con enfoque interseccional y de género en Tegucigalpa (OSHM, 2016), Tijuana, Apatzingán, Guadalupe y Acapulco (Kloppe-Santamaría y Abello, 2019)³, e inspiró el surgimiento de un Observatorio de Seguridad Humana en Michoacán⁴. Los aportes del Observatorio de Medellín también han servido como referente para el desarrollo de estrategias que integran el enfoque de seguridad humana en las políticas de seguridad urbana de gobiernos locales, promovidas en

(s. f.). Para ver un ejemplo de una aplicación de estos trabajos ver: “El parche, un espacio seguro. Capítulo 1–Katarsis: Orígenes” (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UdeA, 2022).

- 2 La metodología surge de la sistematización de la investigación-acción participativa adelantada por un equipo de investigadoras e investigadores académicos y comunitarios del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y del Departamento de Estudios de Paz de la Universidad de Bradford, con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC) de Canadá (2011-2013).
- 3 Para un resumen y análisis de estas metodologías, véase Pearce y Abello (2021).
- 4 El Observatorio de Seguridad Humana está ubicado en Apatzingán y desde hace cinco años hace seguimiento a la situación de seguridad en la Tierra Caliente de Michoacán y anima procesos de organización ciudadana en torno a la seguridad humana y la reconstrucción del tejido social.

América Latina y África por ONU-Hábitat y el Fondo Fiduciario de Seguridad Humana de las Naciones Unidas⁵.

A continuación, reflexionamos sobre los capítulos de este libro, centrándonos en dos temas: los procesos de construcción de la paz total “desde arriba” y “desde abajo”, y la relevancia del enfoque de seguridad humana y sus recientes transformaciones. Nos proponemos, en primer lugar, resaltar la importancia de un diálogo productivo —como lo refleja este libro— entre conocimientos académicos y los que provienen de experiencias vividas. Tal diálogo puede contribuir a que la ambiciosa, pero esencial, propuesta del gobierno de Gustavo Petro de lograr una paz total capte los problemas cotidianos que afectan a la población, teniendo en cuenta sus voces y los aportes críticos de la academia.

En segundo lugar, resaltamos que la seguridad humana se puede convertir en un enfoque “implementable” a través de la co-construcción con comunidades que viven múltiples inseguridades. Es posible adelantar un proceso de humanización frente a la violencia crónica (Pearce, 2007) en Colombia que incluya la provisión de seguridad como un bien público que no reproduce violencias ni economías ilícitas. Esto permite, entre otras, reconocer la manera en que la seguridad económica de las personas se interconecta con otras experiencias de inseguridad. Esto es clave para desmantelar las economías ilícitas que se valen de la incapacidad de muchas personas para edificar una vida digna.

Paz total “desde arriba” y “desde abajo”

En su capítulo introductorio a los temas de paz total y seguridad humana, Julián Muñoz nos orienta a pensar en lo novedoso de estas propuestas, al mismo tiempo que invita a reflexionar seriamente sobre los retos de su conceptualización e implementación. El autor llama la atención sobre lo imperfecto que resulta aspirar a la totalidad de la paz. El punto clave es que se busca que la Paz Total sea un proyecto de Estado, no de un Gobierno. En otras palabras, un proceso garantizado “desde arriba” que no se diluya con cada cambio de administración.

Para este Gobierno, “desde arriba” significa incluir la participación de la sociedad, la protección de derechos y la transformación de los territorios. El reto jus-

⁵ Estas estrategias fueron implementadas como proyectos piloto en Durban, Sudáfrica y Ciudad Juárez, México entre 2022 y 2023, a través del proyecto “Making Cities and Human Settlements Safer after COVID-19: Strengthening Awareness of Safer Cities Tools applying a Human Security Framework” con el apoyo de UNHSTP y UN-Hábitat.

tamente, como dice Muñoz, es cómo traducir la intención del Gobierno nacional en algo real y no solo simbólico. La pregunta que planteamos es si es necesario, aunque no suficiente, liderar este tipo de procesos “desde arriba” con garantías para la participación social. Sin embargo, implementar procesos de construcción de paz “desde arriba” y “desde abajo” en Colombia necesita muchos cambios de mentalidad y expectativas, así como confianza entre varios actores en todos los niveles. Además, requiere de confianza entre el Estado, la sociedad y los actores armados que van a negociar la paz.

Varios autores en el libro enfatizan las incertidumbres que existen con respecto a las reglas que rigen las negociaciones cuando el proceso se inicia “desde arriba”. Muñoz discute cómo ni las lógicas del derecho penal ni las de la guerra posibilitan el desmonte de las estructuras armadas, lo que otorga a la política un papel central en el proceso. En una situación de gran polarización entre proyectos políticos de izquierda y de derecha, un reto enorme es buscar un camino político que convenga a la sociedad del valor de una paz total. Es decir, que adelantar negociaciones con todos los actores armados es el mejor camino para garantizar un futuro en el que ningún grupo armado termine llenando el vacío que dejan los grupos con los que se logran negociaciones exitosas. Esto implica no solo ofrecer incentivos a los actores armados, sino también convencer a los actores políticos divergentes de que una política de Estado dedicada a tal proceso puede ser políticamente viable.

La confianza es clave para que los actores armados puedan tener la certeza de que un nuevo Gobierno no va a cambiar las reglas de los acuerdos que se logren realizar. La historia de Colombia, después de los acuerdos de 2016 en La Habana, demuestra justamente que la implementación puede ser abandonada por el siguiente Gobierno. Así, la confianza es un elemento esencial en todos los procesos. En este contexto, hacer que la Paz Total sea política de Estado es fundamental para la sostenibilidad de los procesos de negociación. Al mismo tiempo, esta política debe llevar a que actores económicos poderosos reconozcan que la paz exige una economía que ofrezca alternativas dignas para las comunidades y generaciones que dependen de las economías ilícitas.

La construcción de paz requiere resultados que le demuestren a la sociedad y a los opositores del Gobierno actual que la estrategia puede funcionar. El proceso “desde arriba” implica, entonces, poner mucha más atención a los detalles de la propuesta de Paz Total. Juan Pablo Acosta Navas analiza estos detalles, al abordar temas todavía no resueltos que siguen generando debate y crítica. Por ejemplo, cómo diferenciar un Grupo Armado Organizado (GAO) de un Grupo Delictivo Organizado. El autor argumenta que, según el Derecho Internacional Humanitario, no se exige que un GAO tenga un proyecto político para ser considerado parte

formal del conflicto armado. La exclusión de un actor como el Clan del Golfo de las negociaciones es, según Acosta, una opción política, no una disposición internacional, lo cual enfatiza como un punto crucial.

La comunidad internacional apoya este proyecto. Como dice Didiher Mauricio Rojas Usma en su capítulo, Colombia tiene un escenario de paz recurrente caracterizado por el “posconflicto débil”, donde se logra un cese de acciones de guerra, pero no está garantizado el mantenimiento de estas condiciones. Rojas señala que la historia de los procesos de paz en Colombia y sus limitaciones proyectan una sombra sobre cada iniciativa. En ese contexto el autor propone lo que llama las “3E” para describir lo que un Gobierno debería ofrecer desde un enfoque de seguridad humana: “estatalidad”, “empoderamiento” y “entutelamiento”.

Sin embargo, si bien “desde arriba”, refiriéndonos a la comunidad internacional y al Gobierno nacional, el proyecto de Paz Total reconoce la importancia de buscar soluciones serias a las violencias y criminalidades de Colombia, falta mucho para persuadir a toda la ciudadanía. Clarificar conceptos como “negociación”, “conversación”, “acercamiento”, “sometimiento” y “acogimiento” sería un paso muy importante, como argumenta Acosta Navas. Esta claridad ayudaría también a todos los actores que participan en los diferentes procesos.

Al mismo tiempo, hay una discusión sobre cómo los “de abajo” viven estas realidades, y cómo persuadir de la importancia de este esfuerzo tanto a las víctimas como a los que han tenido que aceptar órdenes sociales violentos impuestos por los grupos, que implican extorsiones, reclutamiento forzoso y amenazas de todo tipo. Una pregunta clave en este sentido es cómo la sociedad podría empezar a aceptar estas negociaciones sin permitir que aquellos que enarbolan proyectos antidemocráticos se beneficien de la incertidumbre, la confusión y las demoras inevitables de estos procesos, además de apelar a lo que se ha llamado “formas de ciudadanía autoritaria” (Pearce, 2017). La experiencia en Colombia y otros países ha mostrado que hay sectores en el espectro político dispuestos a capitalizar la zozobra de la gente para ofrecer respuestas puramente represivas a problemas históricos, en lugar de proponer un camino de paz y de reducción de violencias. A pesar de que estas opciones se promueven como atractivas, como “soluciones rápidas”, a corto y largo plazo reproducen violencias y autoritarismos estatales, sin mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Por otro lado, los contextos urbanos ofrecen, bajo la idea de lograr la “paz urbana”, una oportunidad estratégica para entender qué significa co-construir la paz “desde abajo”. Como resaltan Pablo Emilio Angarita y Natalia Maya en su capítulo, a pesar de haber estado históricamente invisibilizadas en las políticas públicas relacionadas con la paz, las ciudades colombianas han jugado un papel protagónico en

las dinámicas del conflicto y en la articulación de esfuerzos de construcción de paz. Las ciudades han sido escenarios propicios para la complejización de las dinámicas de violencia en Colombia por la constante hibridación de las lógicas del conflicto interno y la sofisticación del mundo criminal. Además, han sido refugio de víctimas que habitan barrios dominados por actores violentos que a menudo las revictimizan. Es por eso por lo que, como resaltan los autores, resulta necesario que la paz urbana incluya planes de trabajo, metodologías y mecanismos para garantizar la protección de las víctimas y su participación junto con la sociedad civil. También deben incluir medidas de justicia restaurativa y transformaciones socioculturales que aborden el impacto del conflicto y las violencias de índole social y criminal.

El Valle de Aburrá tiene una particular importancia en la discusión sobre la paz total debido a su historia de negociaciones con grupos ligados al narcotráfico y otras economías ilícitas, como bien lo analiza Jairo Bedoya en su capítulo. El autor nos da detalles clave sobre cómo los grupos criminales han logrado construir un orden criminal en los barrios, orden basado en la coerción extorsiva que se ejerce a través de un entramado de alrededor de trecientas bandas en toda la ciudad. Entender el carácter social de este proceso es muy importante, pero también el papel de los actores políticos y económicos.

Bedoya enfatiza que estos grupos han prestado un “servicio de seguridad” en las comunidades más pobres que beneficia a sectores poderosos de la ciudad. Los pactos con estos grupos hay que entenderlos desde intereses políticos y económicos, tanto nacionales como locales. “Hasta ahora”, dice el autor, “en Colombia tanto las políticas de guerra y paz como las políticas de seguridad han sido transables —negociables— con los actores armados, dejando de lado a las víctimas y, peor aún, a los más afectados y afectadas”. Esto ha implicado la consolidación en Medellín de “una cultura de amalgamamiento legal-ilegal”. El problema no es, argumenta, la ausencia del Estado, sino la discrecionalidad con la que el Estado interviene, en otras palabras, el cómo y cuándo lo hace. Abrir el debate sobre las lógicas que han influido en la mutación continua de la criminalidad y las violencias en Medellín, así como del control y la reducción de los homicidios, resalta la importancia de la “paz urbana” dentro del proyecto de Paz Total. Alterar estos procesos de más de tres décadas en Medellín y buscar procesos que ofrezcan nuevos caminos para la paz y la seguridad humana es vital. Para lograrlo, la ciudad tiene un capital humano sumamente preparado.

Las comunidades de Medellín y el Valle de Aburrá tienen una larga historia de resistencias, apoyadas por organizaciones de la sociedad civil y procesos de paz urbana, tal como lo entienden aquellos que han vivido los embates de la guerra y la inseguridad en la ciudad. Hay capítulos en este libro que nos permiten entender a fondo estos procesos, que son de particular importancia debido a una sen-

sación en la ciudad de que el Gobierno no está poniendo suficiente atención a la paz urbana dentro del proceso de lograr la paz total, ni está tomando en cuenta el conocimiento y la experiencia acumulada en la ciudad. El capítulo de Alexandra Fernández, Claudia Cadavid-Echeverri y Luis Emilio León sobre la construcción de agendas de seguridad humana en Granizal, en el municipio de Bello, y el de Demetria Ibargüen, María Isela Quintero, Yorlady Benjumea y Susana Valencia, que recoge las experiencias de las tres lideresas sociales, captan la creatividad social “desde abajo” que hay en Medellín y el Valle de Aburrá. Además, muestran cómo el conocimiento experiencial puede aportar significativamente a la conceptualización e implementación tanto de la paz urbana como de la paz total, como lo expresa muy bien esta cita de las lideresas, en el capítulo 8:

Se recomienda que las políticas públicas que desarrollen la paz reconozcan que la participación política de las mujeres, que acontece en escenarios privados, domésticos o comunitarios, es un pilar político de gran importancia y una verdadera garantía para la paz porque supone también la posibilidad de construir una vida libre de todo tipo de violencias: sociopolíticas, culturales, racistas o basadas en género. Las mujeres ejercemos en nuestra vida cotidiana otras formas de participación, no solo para oponernos a la guerra, sino también para aportar a la transformación cultural y social que requiere la paz. En Colombia no se puede hablar de paz total si no se garantizan unos mínimos de dignidad y seguridad humana en los territorios, a las comunidades y a las personas.

La humanización de la seguridad como requisito de la paz total

A pesar de las críticas que ha suscitado el concepto de seguridad humana por su amplitud y por los riesgos de que sea instrumentalizado para avanzar en estrategias que militarizan aún más aspectos de la vida de las personas, en los últimos diez años se ha generado un renovado interés en este enfoque por parte de diversos actores. Estos lo ven como una herramienta útil para abordar las complejas formas de vulnerabilidad a las que están expuestas las personas en un mundo cada vez más volátil e impredecible. Luego de la adopción de la resolución 66/290 de las Naciones Unidas (2012), en la que la Asamblea General acordó que la seguridad humana se convertiría en el enfoque que ayudaría a los Estados miembros a identificar y abordar los desafíos generalizados y transversales que están afectando la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de sus pueblos, diversos actores, incluidos Estados, organizaciones regionales, agencias de Naciones Uni-

das, organizaciones de la sociedad civil e incluso el sector privado, han incorporado la seguridad humana dentro de sus políticas, marcos de acción, iniciativas y procesos de planeación⁶. Esto ha contribuido paulatinamente a generar consenso en torno a la utilidad de este enfoque para fortalecer marcos analíticos, complementar herramientas y estrategias de protección existentes, y reforzar, ampliar y escalar acciones locales y esfuerzos comunitarios que ayuden a hacer posible la paz y a lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

Si bien la seguridad humana aún no se convierte en una corriente principal en las políticas de seguridad y, por el contrario, hoy vemos el resurgimiento y expansión de discursos y estrategias militarizadas, represivas y centradas en aumentar la capacidad de los estados para librarse de guerras, su evolución como herramienta analítica es notable. Ha pasado de ser solo una perspectiva crítica de las nociones reduccionistas y estado-céntricas de la seguridad, a convertirse en el único enfoque de seguridad que hoy tiene la capacidad de captar con agudeza y precisión el nivel de complejidad de las experiencias de inseguridad que experimentan las personas actualmente. En este momento de la historia, en el que viejas amenazas, como las guerras y los conflictos armados, se interconectan y refuerzan con otros fenómenos como el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas, el aumento en la inequidad y rápidos cambios tecnológicos, la seguridad humana ofrece una comprensión integral de las devastadoras situaciones que afectan a importantes sectores de la población.

El aumento progresivo en la percepción de inseguridad a nivel global, incluso en los países con más altos niveles de desarrollo humano —donde seis de cada siete personas en el mundo se sienten inseguras (PNUD, 2022, p. 4)—, da cuenta de las falencias de los enfoques de seguridad tradicionales que continúan desviando recursos y esfuerzos hacia estrategias que no logran garantizar la seguridad de las personas. Esto subraya la necesidad de seguir desarrollando y afinando el enfoque de seguridad humana. En el último reporte especial sobre seguridad humana publicado por el PNUD (2022), después de la pandemia de la covid-19, se resalta, por ejemplo, que hoy estamos ante una nueva situación planetaria que requiere del diseño de estrategias de protección y empoderamiento basadas en la solidaridad. Estas estrategias deben responder a una nueva generación de amenazas altamente interconectadas que han producido un número récord de personas que hoy viven en zonas de conflicto, un aumento en el número de personas desplazadas, más personas sufriendo hambre e inseguridad alimentaria, un incremento en la violencia

6 Algunos Estados lo han incluido incluso en sus constituciones (Naciones Unidas, 2024).

contra las mujeres y las niñas, así como deterioros graves en la capacidad de los sistemas de salud para responder a emergencias sanitarias (PNUD, 2022, p. 4).

Entender y abordar estos retos de seguridad contemporáneos desde la perspectiva de la seguridad humana es un reto urgente para Colombia, y su éxito es crucial para poder avanzar hacia la paz total. Como bien se explora en este libro, “gobernar a través del lente de la seguridad humana” implica priorizar, tanto en el análisis como en la práctica, las experiencias cotidianas de las personas para identificar sus necesidades, así como los riesgos y amenazas que ponen en vilo su vida e impiden el ejercicio de sus derechos. Esto obliga a una continua revisión del enfoque a partir de la evidencia empírica, de análisis situados de las dinámicas sociales y de aportes de diversas disciplinas. En este sentido, se ha propuesto, por ejemplo, la inclusión de otras dimensiones en los análisis de seguridad humana que tradicionalmente tienen como referente las siete dimensiones planteadas por el PNUD (1994) —seguridad personal, comunitaria, económica, alimentaria, en salud, política y ambiental—, así como la integración del pensamiento sistemático y teoría de sistemas a los análisis sobre seguridad humana (Abello, 2023).

A partir de contribuciones de la psicología y la evidencia que arrojan estudios en comunidades urbanas en varias ciudades de América Latina, el Caribe y Sudáfrica, Abello Colak ha resaltado la necesidad de reconocer e incluir la “dimensión ontológica” de la seguridad de las personas al enfoque de seguridad humana. Definida como la protección de la dignidad y el sentido de “relevancia social” de las personas, esta dimensión se refiere a la necesidad básica que tienen todas las personas de sentir que “importan” (*matter* en inglés). Es decir, la necesidad de sentir que son una parte importante y relevante del mundo que habitan y que pueden tener influencia en la vida de otras personas. Esta necesidad de “ser alguien” y de poder influir en el mundo que habitamos se puede ver amenazada por la discriminación, la exclusión, la ausencia de lazos sociales y redes de apoyo, la deshumanización y la negligencia en la atención a nuestras necesidades individuales. Movimientos de alcance internacional como el *Black Lives Matter* y evidencia recolectada a través de metodologías participativas demuestran que ese tipo de seguridad psicológica es particularmente importante para los y las jóvenes⁷, y que no experimentarla incluso puede afectar su propensión al uso de la violencia (Elliot *et al.*, 2011).

7 Ejercicios de análisis de amenazas a la vida realizados con jóvenes en Kingston, Ciudad Juárez, Durban y Medellín mostraron consistentemente que los y las jóvenes identifican como prioridades la sensación de que sus vidas “no importan”; la falta de atención y comprensión de sus realidades, necesidades y derechos; la constante exposición a tratos discriminatorios, irrespetuosos y estigmatizantes de los que son víctimas, y la falta de espacios para participar y hacer escuchar sus voces (notas de campo Abello Colak 2022, 2023).

La Unidad de Seguridad Humana de las Naciones Unidas ha incluido también la “seguridad tecnológica” en sus análisis, reconociendo que la tecnología tiene un enorme impacto en la vida de las personas y comunidades, y que, aunque este puede ser positivo, también puede poner en serio riesgo los derechos humanos, especialmente de grupos históricamente marginados. En ese sentido, la seguridad tecnológica se refiere a que la seguridad de las personas también depende de su acceso a la tecnología y de la protección frente a los efectos negativos de la digitalización, la automatización, la vigilancia y el impacto de las tecnologías digitales (Human Security for All, s. f.).

Si bien estas ampliaciones corren el riesgo de generar todavía más suspicacias y reñuencia a usar el enfoque de seguridad humana para el diseño de políticas y estrategias de construcción de paz, aquí argumentamos que, por el contrario, esta flexibilidad ayuda a hacer más útil y relevante el enfoque. Al permitir una comprensión más precisa de las experiencias cotidianas de (in)seguridad en diferentes contextos, el enfoque se vuelve más efectivo, sobre todo cuando se usa para abrir espacios de diálogo, participación y co-construcción con diversos grupos y comunidades.

En este libro, dos capítulos demuestran que una visión multidimensional de la seguridad es la que más resuena con las comunidades y con nociones de paz que articulan las personas en territorios que han sufrido los embates de los conflictos rurales y urbanos. El capítulo que explora la co-construcción de una agenda de seguridad humana en el Municipio de Bello, por ejemplo, analiza cómo la comunidad está expuesta a amenazas multidimensionales. Además de identificar afectaciones en su seguridad económica, en salud, ambiental y comunitaria, la comunidad prioriza su seguridad tecnológica, en virtud de la vulnerabilidad que sufren por falta de acceso a tecnología y a conectividad. En el capítulo 8, que entrelaza los testimonios de las tres lideresas e investigadoras comunitarias, también se hace eco de una visión amplia y multidimensional de las amenazas a las que han estado expuestas y que van desde la violencia armada por parte de grupos criminales y fuerzas del Estado, hasta la discriminación, el racismo y la exclusión que experimentan como mujeres en espacios de participación dominados por lógicas machistas y explotativas.

A lo largo de este libro queda clara la necesidad de pensar en la paz y la seguridad “desde abajo”, en función de la garantía y protección de los derechos de las personas. Como dice una de las lideresas en su relato; “es que, sin agua potable, alimentación, vivienda, salud, educación no puede haber una paz total. Paz es, por lo menos, tener tres comidas al día. Paz es, que por lo menos, nos escuchen cuando denunciamos las violencias contra las mujeres”. Esta noción amplia de paz que han articulado líderes y lideresas comunitarias y víctimas sobrevivientes de varias comunas afectadas por la violencia en Medellín implica la “dignifica-

ción de la vida” en la ciudad, el restablecimiento y “protección de los derechos individuales y colectivos” de las comunidades y la generación de “condiciones de desarrollo” que pongan fin a la exclusión, estigmatización y desigualdad (Corporación Con-Vivamos y Universidad de Antioquia, 2021).

Lograr esta paz, que incluye, pero no se limita al cese de hostilidades y la desmovilización o sometimiento de grupos armados ilegales, requiere de estrategias de seguridad humana que incluyan medidas que respondan a las necesidades de protección inmediatas de la población, así como medidas a mediano y largo plazo que reduzcan la vulnerabilidad de las personas a las múltiples amenazas que ponen en vilo su vida y sus derechos.

¿Cómo articular estrategias de seguridad de este alcance y complejidad? Esta es una de las preguntas que se plantean a lo largo de los capítulos de este libro, así como la pregunta por las implicaciones que tiene su implementación para las instituciones del Estado, incluida la Policía Nacional. El libro resalta la preocupación por la operacionalización del enfoque de seguridad humana que es recurrente entre sus críticos. Lo que queda claro con el análisis que se ofrece en estos capítulos, y con los esfuerzos que se han hecho en Colombia y en otros países, es que para operacionalizar el enfoque hay que contextualizarlo, territorializarlo y recentrar el análisis en los individuos. Solo de este modo el enfoque permite reconocer los diversos problemas y factores que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas según su identidad, el contexto que habitan y su relación con sus comunidades, instituciones y Estados. Esta visión de las dinámicas de inseguridad, contextualizada y centrada en las personas, es lo que permite repensar e implementar políticas y programas integrales.

Aplicar el enfoque de seguridad “desde abajo”, con la participación de las comunidades, de organizaciones de la sociedad civil y de varias instituciones públicas, ha permitido usarlo para hacer diagnósticos integrales más acertados de los problemas de seguridad multidimensionales que enfrentan comunidades y grupos poblacionales en contextos específicos. A partir de estos diagnósticos, se han identificado estrategias de acción relevantes y viables. Un ejemplo concreto de la operacionalización del enfoque de seguridad humana para guiar políticas públicas es el diseño de “planes locales de seguridad humana” en Ciudad Juárez, México, y en Durban, Sudáfrica, entre 2022 y 2023⁸. Estos planes, que buscan

8 En ambas ciudades los gobiernos locales, con el apoyo de UN-Hábitat, se comprometieron a liderar procesos de co-construcción con la sociedad civil y los habitantes de dos comunidades piloto (KwaNdengezi en Durban y Colonia 16 de septiembre en Ciudad Juárez). Estos llevaron

abordar las amenazas a la vida, la dignidad y los medios de vida más apremiantes para las comunidades, demuestran que el enfoque de seguridad humana puede posibilitar la participación de actores que normalmente no pueden influir en el diseño de estrategias de seguridad, como defensores y defensoras de derechos humanos y habitantes de las comunidades.

Además, este enfoque permite romper silos institucionales y articular los esfuerzos que hacen diversas instituciones promoviendo respuestas más integrales a problemas que enfrentan diferentes grupos, como mujeres, jóvenes, niños y niñas y población que vive en asentamientos informales. También permite pensar en acciones que deben implementarse en el corto, mediano y largo plazo.

La capacidad de diseñar estrategias contextualizadas que permitan reconocer y abordar las necesidades de protección inmediatas que tienen diferentes grupos poblacionales, así como los problemas que vulneran sus derechos, convierte al enfoque seguridad humana en una herramienta necesaria para lograr la paz tal y como la anhelan las comunidades. Este enfoque también hace necesario el establecimiento de otros parámetros para la evaluación de la efectividad de las políticas y estrategias gubernamentales, y de las instituciones que las diseñan e implementan.

La seguridad humana obliga a repensar la función que tienen instituciones como la policía, especialmente en países como Colombia, donde su labor ha estado distorsionada por las demandas de la guerra interna, de la guerra contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Pero en lugar de sugerir que la policía y el ejército amplíen sus funciones para abordar amenazas a la seguridad alimentaria, ambiental y comunitaria, la aplicación del enfoque de seguridad obliga al Estado y a la sociedad a encontrar formas de articulación local que involucren a todas las dependencias públicas y a organizaciones civiles y comunitarias que actúan en un territorio en el diseño e implementación de estrategias de protección integrales.

Esto implica reconocer que la seguridad humana no la puede proveer la policía o el ejército a través de medidas de vigilancia, contención o represión, sino que estas instituciones deben concentrarse, como lo establece la Constitución de Colombia, en garantizar que haya condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades, asegurándose de que el uso de la fuerza sea legítimo. Este punto clave es analizado por Pablo Emilio Angarita, Yhony Alexander

al diseño de planes de acción a cinco años que abordan: i) violencias que ocurren en espacios públicos y familiares, ii) falta de oportunidades y ambientes adversos para los y las jóvenes, iii) precariedad económica y alimentaria de la población, iv) capacidad de las instituciones para proteger a la comunidad, y v) acceso a servicios que permiten vivir con salud y dignidad.

Osorio y Natalia Pérez Puerta en su capítulo. Los autores exploran con detalle los factores que determinan el uso de la fuerza policial y reconocen que el gobierno de Gustavo Petro ha planteado un horizonte de reformas institucionales y operativas a esta entidad que están en sintonía con el enfoque de seguridad humana.

Las propuestas incluyen, por ejemplo, que la policía recupere su carácter civil y reoriente su labor a la resolución pacífica e inteligente de conflictos, así como la apertura de espacios de participación para la veeduría ciudadana que ayuden a recuperar su legitimidad y a reducir la corrupción. Si bien son propuestas promisorias, los autores también reconocen que ha sido evidente la improvisación y el desorden en la ejecución de estas. Esto es preocupante, no solo por el aumento en los niveles de violencia e inseguridad en varias zonas del país, lo que podría reducir el apoyo social hacia estas reformas, sino también porque los procesos de transformación de las instituciones policiales requieren tiempo.

Conclusión

Al alejarse de los enfoques de seguridad dominantes que han sido incapaces de detener la reproducción de violencias en Colombia y en América Latina, el gobierno de Gustavo Petro ha dado un paso de relevancia global y ha abierto una serie de oportunidades históricas para adelantar reformas clave en el funcionamiento de las instituciones del Estado y en la relación entre el Estado y la sociedad. Para lograr dichas transformaciones resaltamos aquí que es necesaria mucha voluntad política y procesos “desde arriba” que capitalicen y potencien procesos de co-construcción “desde abajo”. Solo la combinación de esfuerzos desde diferentes espectros del escenario político y social del país puede lograr aterrizar las ideas, propuestas y aspiraciones de la Paz Total de una manera que garantice un apoyo social suficiente y la legitimidad de los esfuerzos del Estado.

La operacionalización del enfoque de seguridad humana como guía del ejercicio de gobierno en Colombia es posible, pero requiere también de la apertura de espacios participativos que capten las necesidades, expectativas, vivencias y propuestas de la sociedad, integrándolas en estrategias de acción localizadas y contextualizadas. En otras palabras, la co-construcción de paz y de seguridad en Colombia requiere lograr un consenso básico sobre la centralidad de la protección de la vida y los derechos de las personas. Lograr ese consenso no es fácil en una sociedad altamente polarizada, pero esfuerzos críticos y propositivos como el que hace el colectivo diverso que conforma el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín en este libro, ayudan a identificar retos e ideas hacia dónde y cómo avanzar para superarlos.

Referencias

- Abello, A. (2023). *Mapping systems of human (in)security to understand the Covid-19 Pandemic's enduring impact on urban violence*. LSE; GIGA; VSP Network.
- Corporación Con-Vivamos y Universidad de Antioquia. (2021). Ruta restaurativa para la paz y la reparación territorial urbana. Proceso de Memoria y Paz Territorial Zona Nororiental, Medellín, 2021.
- Elliott, G., Cunningham, S., Colangelo, M. y Gelles, R. (2011). Perceived mattering to the family and physical violence in the family by adolescents. *Journal of Family Issues*, 32(8), 1007-1029. <https://doi.org/10.1177/0192513X11398932>
- Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UdeA. (2022, 16 de junio). El parche, un espacio seguro. Capítulo 1: Katarsis: Orígenes [video]. <https://www.youtube.com/watch?v=CSu1vi4M3Ko>
- Gómez, H., Giraldo, L., Zuluaga, L., Montoya, K., Quintero, D., Agudelo, L. (2014). Hacia una agenda de seguridad para Medellín: desde la perspectiva de sus comunidades. Universidad de Antioquia; Instituto de Estudios Regionales.
- Human Security for All. (s. f.). What is human security? <https://humansecurity.world/what-is-human-security/>
- Kloppe-Santamaría, G. y Abello, A. (eds.). (2019). Seguridad humana y violencia crónica en México: nuevas lecturas y propuestas desde abajo.
- Naciones Unidas. (2012). Resolución 66/290. <http://undocs.org/sp/A/RES/66/290>
- Naciones Unidas. (2024). Human security: report of the Secretary-General. General Assembly, seventy-eight session. <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2024/06/A.78.665-Report-of-the-Secretary-General-on-Human-Security.pdf>
- Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH). (s. f.). Portafolio. <https://observatorioseguri.wixsite.com/oshmedellin/portafolio>
- Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH). (2014). Nuestras voces sobre seguridad humana en Medellín. Diálogos sobre seguridad. Instituto de Estudios Regionales (INER). <http://hdl.handle.net/10495/4630>
- Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH). (2016). Informe: impacto de las violencias e inseguridad en la vida de las mujeres desde un enfoque de seguridad humana. OXFAM.
- Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH). (2021). Pandemia y seguridad humana: impactos del COVID-19 en las comunidades de Medellín y propuestas para afrontarlos. Observatorio de Seguridad Humana de Medellín; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas–Universidad de Antioquia; Latin America and Caribbean Centre–London School of Economics, LSE; Corporación Mi Comuna; Corporación Con-Vivamos; Corporación Cultural Nuestra Gente.

Pearce, J. y Abello, A. (2021). Humanizing security through action-oriented research in Latin America. *Development and Change*, 52(6), 1-26. <https://doi.org/10.1111/dech.12689>

Pearce, J. (2007). Violence, power and participation: building citizenship in the contexts of chronic violence. IDS Working Paper 274. Institute of Development Studies; University of Sussex. <http://hdl.handle.net/10454/3802>

Pearce, J. (2017) Authoritarian and Resistant Citizenship in Latin America. En J. Mackert y B. Turner (eds.), *The Transformation of Citizenship, vol. 2, Struggles, Resistance and Violencia*. Routledge.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). New Threats to Human Security in the Anthropocene: Demanding greater Solidarity. 2022 Special Report PNUD. <https://hs.hdr.undp.org/pdf/srhs2022.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1994). Informe sobre desarrollo humano 1994. <https://hs.hdr.undp.org/pdf/srhs2022.pdf>

PRESENTACIÓN

Julián Andrés Muñoz Tejada*

Juan Pablo Acosta Navas**

Este libro presenta un conjunto de análisis derivados de las reflexiones académicas e investigaciones teóricas y con comunidades que hemos desarrollado en el grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia durante los últimos años. De este grupo hace parte la línea de investigación Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (en adelante OSHM) que constituye una apuesta transversal para todo el equipo de investigadoras e investigadores, tanto académicos como comunitarios.

El concepto de seguridad humana, como se observará en esta obra, no es nuevo en la literatura y ha venido afianzándose por lo menos durante las últimas tres décadas. Lo novedoso es que ahora haga parte de la agenda de gobierno, pues durante el periodo de Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia (2022-2026), se ha incorporado como parte de su política pública de Paz Total. Actualmente, es posible encontrar referencias a la seguridad humana en diversos documentos oficiales, discursos y declaraciones de funcionarios del Estado.

De manera muy rápida, la seguridad humana en Colombia pasó de ser un objeto de interés para algunos sectores académicos y populares, que abordaban o reivindicaban este enfoque, a ser parte integral de las apuestas del gobierno de turno. Esto ha quedado plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” y en la Ley 2272 de 2022 o Ley de Seguridad Humana y Paz Total.

-
- * Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Coordinador del grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la misma universidad.
 - ** Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Integrante del grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la misma universidad.

A quienes integramos el grupo de investigación y el OSJM nos genera bastante expectativa el cambio de enfoque en el actual gobierno. La seguridad humana deja de figurar como un elemento literario o académico y se convierte en una herramienta “para gobernar”. A su vez, nos inquieta que la grandilocuencia de los discursos presidenciales o la reiteración de categorías en los documentos oficiales no se concreten en acciones que en efecto aporten a la provisión de seguridad y a la construcción de paz.

Desde hace años, las comunidades en sus barrios adelantan acciones orientadas a enfrentar violencias e inseguridades cotidianas. De ahí que la novedad de la paz total y la seguridad humana se refiera, principalmente, a que permiten nombrar y pensar, conforme a nuevos referentes, aquello que durante décadas han hecho las comunidades para resistir a ciclos de violencia recurrentes. Estos ciclos parecen responder a las lógicas de un *remake* de una película: se introducen ligeras modificaciones en su libreto, pero su argumento se mantiene intacto. Es decir, actores distintos al Estado definen y representan el orden para quienes habitan nuestros barrios.

Tan pronto el gobierno de Gustavo Petro empezó a referirse con nuevos adjetivos a la paz y a la seguridad, comenzaron a agendarse foros y conversatorios, y aparecieron columnas de opinión y publicaciones que hicieron eco de este nuevo enfoque, bien para aplaudir o bien para objetar el cambio de perspectiva. A quienes integramos el grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana nos generó cierta perplejidad, pues nuestro equipo había consolidado durante años algunas aproximaciones conceptuales sobre la seguridad humana, al igual que reflexionaba sobre sus posibilidades y sus limitaciones. Así que nos surgió la pregunta: ¿qué podemos aportar al debate generado cuando el Gobierno nacional llamó “total” a la paz y se refirió a la seguridad como “humana”?

Esa pregunta nos instó a compilar en este volumen algunos resultados de las investigaciones del grupo. Igualmente, nos llevó a pensar sobre posibles y nuevas líneas de investigación a partir de los desafíos que propone para el campo de la seguridad abandonar las visiones clásicas y restrictivas: como la de seguridad pública, que se enfoca en las gramáticas de la guerra; o la de seguridad ciudadana, centrada en el uso del sistema penal. Esto le abre paso a la seguridad humana, que entiende que los problemas, los objetos y sujetos a proteger, y las amenazas relativas al campo de la política no se pueden reducir a las lógicas de la guerra o al control del delito.

Como se expresa en varios capítulos de este libro, los orígenes del concepto de seguridad humana no se remontan a los estudios de seguridad —como pudiera suponerse—, sino a los estudios sobre desarrollo humano y derechos humanos.

Por ello, el primer abordaje, ampliamente conocido, aparece en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994. Desde ese momento, se generó un amplísimo debate sobre el sentido y el alcance de una manera de pensar la seguridad que ampliaba el campo mismo de la seguridad al desarrollo y los derechos humanos. En el escenario internacional, fue usado para cuestionar visiones militaristas sobre la seguridad, heredadas de la Guerra Fría. Sin embargo, rápidamente fue aprovechado por las corrientes hegemónicas y se le estiró de tal manera que, incluso, llegó a ser entendido como la raíz de una doctrina intervencionista y belicista como la “responsabilidad de proteger”. Paradójicamente, esta visión distorsionada también fue impulsada desde la Organización de Naciones Unidas para “prevenir” crímenes atroces.

En el año 2008, en pleno auge de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (en adelante PDS), un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia y de otras instituciones partió de la premisa de que esa particular manera de pensar y gestionar los problemas, donde hacer la guerra es sinónimo de provisión de seguridad, era solo una entre muchas formas de aproximarse a los fenómenos del campo de la seguridad.

La creación del OSJM implicó la convergencia de visiones alternativas sobre la seguridad y agendas políticas comprometidas con la resistencia y agencia de las comunidades. Se trató de una articulación necesaria entre academia y organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad de Medellín, que hasta la actualidad ha permitido reflexiones como las siguientes:

1. Más importante que un hipotético derecho a la seguridad, en un contexto democrático, se impone como horizonte la perspectiva de la seguridad de los derechos.
2. Aunque la experiencia sobre prácticas y discursos en torno a la seguridad la muestran a través de un enfoque y modelo primordialmente represivo, la seguridad humana propone que su provisión no se puede reducir a la vigilancia, el control territorial y el uso de la fuerza.
3. Aunque la experiencia con las autodefensas armadas genera suspicacias respecto a la seguridad desde la sociedad, la seguridad humana permite ver que no siempre esa seguridad provista desde las comunidades implica el recurso a la violencia.
4. Hay una apuesta política y epistemológica que invita a que la investigación sobre violencias e inseguridades trascienda los cánones del extractivismo cognitivo y la comprensión de quienes padecen esas violencias e inseguridades como meros sujetos pasivos sin capacidad de agencia. La investigación en esos campos exige el reconocimiento de quienes habitan los territorios y sus conocimientos o saberes prácticos.

5. Las investigadoras e investigadores comunitarios de nuestro grupo concretan esa articulación entre los saberes especializados del conocimiento académico con los saberes prácticos o populares de los entornos comunitarios en una sintonía singular que entiende ambos saberes —el comunitario y el académico— como complementarios y necesarios para una mejor comprensión de los fenómenos sociopolíticos.

El OSQM ha intentado avanzar en esas líneas de análisis, incluso mientras se iba a contracorriente de la visión hegemónica de la PDS. Durante este tiempo, al decir de varias organizaciones de derechos humanos, la sociedad colombiana estaba embrujada bajo el hechizo de una fascinación por el recorte de derechos a cambio de una “mejor y mayor seguridad”. Hoy, quince años después de iniciar esta apuesta por repensar la seguridad desde perspectivas críticas, ocurre algo que a los integrantes del OSQM les genera entusiasmo, pero al mismo tiempo muchas preguntas: la seguridad humana es el concepto escogido por el presidente para referirse a la seguridad.

Los problemas ahora no están necesariamente vinculados a los usos, discursos y anuncios sobre la seguridad, sino al tipo de políticas que se diseñen y cómo se piensan implementar. La primera iniciativa del gobierno de Gustavo Petro fue conocida como política de Paz Total y para ello lideró ante el Congreso la aprobación de la Ley 2272 en el año 2022. En resumen, la iniciativa del gobierno Petro se funda en la premisa de que cualquier intento por avanzar en la construcción de paz con grupos armados estará condenada al fracaso si no se negocia con todos, incluidos aquellos sin estatus político.

Este tipo de visiones sobre la negociación no es inédito. En otras ocasiones ya se intentó negociar con varios grupos al mismo tiempo, como ocurrió durante la administración de Belisario Betancur (1982-1986). También, se ha procurado negociar con grupos armados sin estatus político, como ocurrió con los carteles del narcotráfico, con las Milicias Populares en Medellín o con las Autodefensas Unidas de Colombia. Los balances, en general, no son muy prometedores. Una rápida mirada a esas experiencias nos muestra algunos aprendizajes que tendrían que ser reconocidos:

- Las mesas simultáneas de negociación del gobierno de Betancur fracasaron, entre otros motivos porque el Estado fue incapaz de mantener mesas con tantos actores armados al tiempo, incluidos ceses al fuego sostenidos con varios grupos en simultánea.
- Con los carteles del narcotráfico, el Estado se mostró debilitado y los narcotraficantes fortalecidos;

- Con las Milicias Populares de los años 90 en Medellín, como expuso el Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), la indisciplina de sus integrantes y el modelo de transición sin desarme parecen haber asegurado el fracaso de tales acuerdos.
- Por último, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se evidenciaron rápidos procesos de rearme de sus integrantes, la conformación de nuevos grupos armados herederos del paramilitarismo y la persistencia de actividades delictivas de sus máximos comandantes, incluso privados de la libertad.
- Una paz negociada con la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), que siguió un tradicional modelo de negociación entre élites y que, al menos en términos de paz negativa, implicó el cierre de la conflictividad con esa organización insurgente.

Este libro integra reflexiones sobre la importancia de concretar símbolos poderosos como “paz total” y “seguridad humana” en acciones y gestiones concretas. El grupo de investigación, como ya se anunció, presenta una composición particular, pues en él confluyen distintas profesiones: periodismo, antropología, sociología, ciencia política, derecho y psicología. Adicionalmente, se destaca la pluralidad en los campos de acción de sus integrantes; algunos son docentes e investigadores universitarios, otros han participado de las administraciones municipales o departamentales. Sobresale en nuestro equipo la presencia de investigadoras e investigadores comunitarios. Aquí, nos referimos a personas comprometidas con ejercicios de liderazgo comunitario y popular que participan de investigaciones y discusiones del grupo, no son meros enlaces con los territorios.

Esta variedad de formaciones de base y de roles en la sociedad, refleja también la diversidad de apuestas académicas, de enfoques metodológicos y de estrategias para desarrollar los capítulos. La diversidad de quienes hacemos parte del grupo de investigación se plasma en este libro y expresa toda una pluralidad de perspectivas y de métodos de investigación sobre la seguridad humana, los derechos humanos y la paz.

Quien se aproxime a este libro se encontrará con capítulos soportados de manera rigurosa en la literatura académica reciente, como también con reflexiones de mayor coyuntura en torno a los usos —y quizá abusos— que sobre la seguridad humana y la paz total emergieron durante los primeros meses de la presidencia de Gustavo Petro. En igual sentido, otros capítulos fueron elaborados con una estructura poco convencional para obras de este tipo y presentan reflexiones polifónicas sobre experiencias cotidianas de construcción de paz y de provisión de seguridad humana. En estos capítulos, contamos con la perspectiva de las pro-

pias lideresas populares, quienes están articuladas tanto a los procesos sociales en sus territorios como al grupo de investigación, en calidad de investigadoras comunitarias.

Nuestra contribución pretende aportar al debate sobre seguridad humana como enfoque y como concepto. Ambos deben ser funcionales no solo en términos de la crítica política sino también en cuanto al respeto y la garantía de los derechos humanos, en particular, de los derechos de aquellas poblaciones que han sufrido los estragos de la guerra y las consecuencias de los enfoques militaristas de la seguridad.